

C.A. de Santiago

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

En los autos Rit I-389-2021 del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, la parte reclamante dedujo recurso de nulidad, en contra de la sentencia definitiva de 10 de diciembre de 2021, que acogió parcialmente el reclamo, rebajando el monto de la multa. Funda su recurso, en dos causales, que deduce una en subsidio de la otra.

Como primera causal se fundamenta en la establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia ha sido dictada con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, denunciando infringido artículo 31 del DFL N° 2 de 1967 que dispone la Reestructuración y Fija Funciones de la Dirección del Trabajo, y el artículo 9° del Código del Trabajo, todo ello en relación al lugar en que debe encontrarse disponible la información laboral.

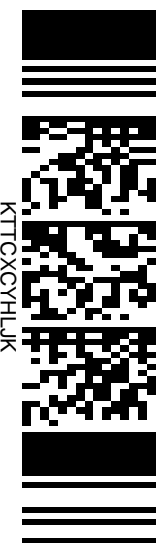
Como segunda causal, en subsidio, se deduce nuevamente la del artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, en relación al artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando haya sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, ello en relación a la inexistencia de un desarrollo lógico y concordante, en la determinación de las restricciones de la autoridad.

Pide se acoja que se acoja el recurso de nulidad, y se dicte sentencia de reemplazo que disponga la invalidación total o parcial del procedimiento, quedando el mismo en estado de celebrarse la audiencia de juicio, o se anule solo de la sentencia, determinando que se rechaza o rebaja al mínimo legal las multas interpuestas.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento quedando la causa en acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte demandante luego de hacer una lata referencia a los antecedentes y transcribir algunos considerandos del fallo, entrando en lo pertinente esgrime como primera causal, la del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia ha sido dictada con



infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, denunciando infringido las disposiciones del artículo 31 del DFL N° 2 de 1967 que dispone la Reestructuración y Fija Funciones de la Dirección del Trabajo y el artículo 9° del Código del Trabajo.

Expresa que la sentencia desconoce las normas señaladas, pues el reclamo formulado dice relación con la transgresión en que incurre el fiscalizador de la recurrida, desde el momento que requiere antecedentes laborales que físicamente se encontraban en locales de trabajo emplazados en centros comerciales cerrados por disposición de la autoridad, pretendiendo así el fiscalizador que ellos le fueran proporcionados electrónicamente, lo cual, contraría el claro tenor de las mencionadas normas, que únicamente exigen la disponibilidad física de tales antecedentes.

Señala que el juez tergiversa la discusión de autos al afirmar que la parte habría solicitado en su reclamo que solo se podía requerir la documentación en el lugar físico del establecimiento, pues ello no es lo reclamado, sino que lo pedido es determinar que la ilegalidad se comete cuando a pretexto de una fiscalización remota, se exijan antecedentes físicos en formato electrónico.

Agrega que la norma del artículo 31 del DFL N° 2 exige la existencia de la documentación laboral en los establecimientos y faenas donde se labore y desarrollen las funciones, lo que ocurre en la especie, y dicha norma no faculta al inspector a solicitar antecedentes con independencia de su soporte y del lugar donde se mantuvieron, pues no existe obligación alguna de mantenerlo digitalizado.

Finaliza señalando que ello influye en lo dispositivo del fallo, pues de la norma no existe norma que explique la imposición de plazos tan exigüos para la entrega de la información, pues entre la información que se solicitó existía la de trabajadores de muchas comunas y ciudades ubicadas fuera de la jurisdicción de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, lugares que además, tenían restricción al acceso por orden de la autoridad.

SEGUNDO: Que el artículo 31° del m DFL N° 2 de 1967, dispone que:

“ Los funcionarios del Trabajo podrán requerir de los empleadores, patrones o de sus representantes y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les



corresponda y todos los datos pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la Dirección del Trabajo, incluso la exhibición de sus registros contables para su examen.

Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones”.

Por su parte el inciso quinto del artículo 9 del Código del Trabajo dispone: *“El empleador, en todo caso, estará obligado a mantener en el lugar de trabajo, o en un lugar fijado con anterioridad y que deberá haber sido autorizado previamente por la Inspección del Trabajo, un ejemplar del contrato, y, en su caso, uno del finiquito en que conste el término de la relación laboral, firmado por las partes.”*

TERCERO: Que, ni una ni otra disposición, de acuerdo a los hechos establecidos en la sentencia aparecen infraccionados de una manera que influyan en lo dispositivo de la sentencia, puesto que efectivamente tal como lo indica en su considerando quinto, dichas normas no constriñen a la autoridad fiscalizadora a requerir únicamente en el lugar físico donde se encuentra el establecimiento o faena de que se trate la documentación en cuestión, pudiendo conforme queda en evidencia del inciso primero del artículo 31 del ya citado DFL N° 2 requerir de los empleadores, patrones o de sus representantes y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda.

De este modo el tribunal no comete yerro cuando interpretando la norma en relación con la circunstancias en que se lleva a efecto la fiscalización sostiene en el mismo considerando lo siguiente: *“..... la fiscalización que dio origen a la resolución reclamada fue efectuada en forma remota, en razón del contexto de pandemia existente la época de su realización, y que persiste en la actualidad, fiscalización en la que, por tal motivo, se le requirió a la parte empleadora que los antecedentes respectivos fuesen remitidos vía correo electrónico. En tal sentido, conviene destacar que según consta en el correo incorporado por la propia reclamante, de 26 de abril de 2021, remitido a dicha parte por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo Fernando Ulloa Andrade, en que figura como asunto “Notificación de Inicio de procedimiento de fiscalización laboral 1323-2020-1486”, se le*



informa a la reclamante que dicha fiscalización será efectuada en forma remota, a través del uso de correos electrónicos, requiriéndosele que se remita por esa vía toda la documentación solicitada, no constando ningún tipo de observación o reparo de la parte empleadora respecto de la modalidad en que dichos antecedentes debían ser enviados.”

CUARTO: Que, por lo demás no se observa el agravio para la parte recurrente si se considera que su petición subsidiaria fue acogida, al declarar la sentencia que acogía parcialmente el recamo, reduciendo de 15 a 8 ingresos mínimos mensuales la multa impuesta.

De esta forma, conforme lo dicho en este y en el considerando precedente, y considerando además en que no se es concreto en indicar que normas de aquellas que regulan la interpretación de la ley habrían sido vulneradas a entender de la recurrente, la causal principal invocada será desestimada.

QUINTO: Que, como causal subsidiaria, la parte demandante deduce la del artículo 477 del Código del Trabajo en relación al 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido dictada con infracción de ley que influya en lo dispositivo del fallo, toda vez que ha sido dictada con infracción manifiesta de las reglas de la sana crítica.

Indica que la sentencia comete un yerro jurídico en su considerando séptimo, al validar la tesis de la Dirección del Trabajo que desconoce dos conceptos: “el acto de autoridad” y la “cuarentena”, siendo la cuarentena un efecto de los actos de autoridad.

Expresa el recurrente que la sentencia desconoce tanto la prueba documental aportada por esta parte y las declaraciones contestes de los testigos Rodrigo Berti y Yesica Aguirre, en el sentido de las serias restricciones que atravesaba la empresa debido a las medidas impuestas por la autoridad, y que impedían entregar la información en plazo solicitado por el fiscalizador.

Agrega que el fallo transgrede la sana crítica pues no existe un desarrollo lógico y concordante de cómo se ha llegado a la convicción de que la prueba aportada por la reclamante debe ser apreciada en un sentido determinado, limitándose a enumerar la misma, y no se explican, de igual manera, los principios de la ciencia que la llevan a rechazar la reclamación, ni



existe en la sentencia que se cuestiona, una explicación a la máximas de la experiencia que se habrían impuesto por sobre los postulados defendidos por la reclamante.

Finalmente; señala que lo anterior influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues ignora las medidas restrictivas de movilidad impuestas por la autoridad, obviando las dificultades de traslado incluso entre ciudades, y obligando a realizar algo imposible que incluso la ley prohibía.

SEXTO: Que, el artículo 456 del Código del Trabajo establece que:

“El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.”

De este modo por medio de la causal invocada lo que corresponde es determinar si en su sentencia el tribunal ha vulnerado en forma manifiesta, esto es de manera evidente y notoria, las reglas indicadas en el artículo 456 ya citado, puesto que de no ser así, esto es si no existe vulneración de los principios y reglas que este señala, el juez ha sido soberano para apreciar la prueba rendida en la causa y este Corte no puede entrar a ponderar el hecho establecido sin riesgo del vulnerar gravemente el principio de la inmediación. Además de ello la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

SÉPTIMO: Que, en este aspecto, la recurrente no logra dejar de manifiesto que reglas de la ponderación de la prueba conforme la sana crítica, han sido vulneradas de una forma manifiesta, esto es, si son principios de la lógica, cual o cuales y como ocurre o si se trata de máximas de experiencia o conocimiento científicos, limitándose en lo pertinente a sostener que: *“En consecuencia, la transgresión por parte del fallo dictado por el Primer Juzgado del Trabajo con fecha 10 de diciembre de 2021, resulta evidente: no existe un desarrollo lógico y concordante de cómo se ha llegado a la convicción de que la prueba aportada por esta parte debe ser apreciada en un sentido determinado –limitándose tan sólo a referenciar un ejercicio*



que tampoco, por lo demás, desarrolló el Juez de primera instancia—; no se explican, de igual manera, los principios de la ciencia que la llevan a rechazar la reclamación de esta parte, ni, finalmente, existe en la sentencia que se cuestiona una explicación a la máximas de la experiencia que se habrían impuesto por sobre los postulados defendidos por la reclamante para arribar a la aparente conclusión que postula.” Esto es, en incurre en igual falta de explicación que la sostiene adolece la sentencia, obviando que es su obligación dejar como la vulneración a las reglas del artículo 456 del Código del Trabajo es de carácter manifiesto.

Con lo dicho, más teniendo nuevamente en consideración que el reclamó fue parcialmente acogido, se desestima también esta causal subsidiaria y con ello el recurso de nulidad en su integridad.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se resuelve:

Que **se rechaza**, con costas el recurso de nulidad deducido por la parte reclamante en contra de la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT I-389-2021, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse

Laboral-Cobranza N° 4193-2021.

Pronunciada por la **Duodécima** Sala, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, e integrada además, por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y la Ministra (S) señora Andrea Díaz-Muñoz Bagolini, quien no firma por ausencia.



KTTCCYHLJK

Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Ministra Suplente Lidia Poza M. Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

